

La objeción fiscal y laboral

Pedro Otaduy *

En 1849, el estadounidense Henry David Thoreau analizaba en un ensayo titulado *Desobediencia Civil* la situación de su país, en donde señalaba que una sexta parte de la población se hallaba sometida a esclavitud y cuyo ejército había invadido México. En un momento de su trabajo decía:

«Me veo enfrentado con este gobierno americano directamente y cara a cara una vez al año, no más, en la persona de su recaudador de impuestos; éste dice entonces: "Reconóceme". Y la manera más sencilla, más práctica y, en el actual estado de cosas, más indispensable de tratarle en esta materia (...) es decirle que no»¹.

Hoy, en la Europa desarrollada de finales del siglo XX, nos encontramos al Estado bastante más a menudo, pero la declaración de la renta sigue siendo, en la mayoría de los casos, la única ocasión que tenemos de arreglar cuentas con él. Ha llegado el momento de pagar, dicen, pero hay quienes creemos que ha llegado también el momento de analizar. Y como de contribuir a los gastos del Estado se trata, vemos que entre las partidas presupuestadas hay una que, bajo el nombre de *defensa*, se lleva una buena cantidad de millones. Esa *defensa* no es nuestra defensa:

«¿Defensa de quién?, ¿defensa de qué?, ¿defensa ante quién?, ¿defensa por quién?

* Pedro Otaduy es miembro de la Comisión de Objeción Fiscal de Navarra.

¹ Gonzalo Arias, *La No-violencia, arma política*, Nova Terra, Barcelona, 1976.

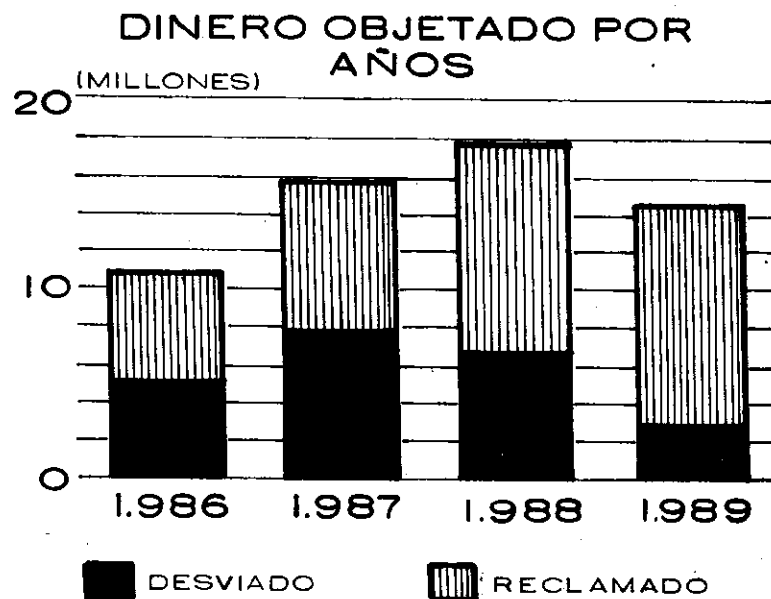
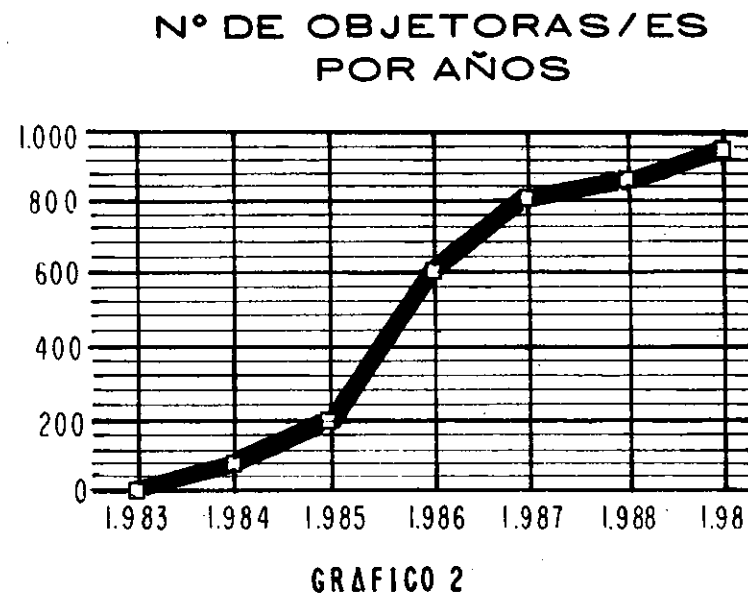


GRAFICO 1

»Si nos preguntamos a cada uno de nosotros qué es lo que hay que defender se obtendrían muchas respuestas: la calidad de la vida, el derecho a la salud, el acceso a la cultura, el respeto a los derechos humanos, el entorno natural, la no explotación de unos por y para otros, los derechos de las minorías ante las mayorías... Muchas respuestas posibles y todas bajo un denominador común: Ninguna, absolutamente ninguna, coincide con lo que el Estado defiende mediante los ejércitos.» (Del folleto de la campaña de objeción fiscal.)

Es éste el espíritu que en 1983 llevó a la Asamblea Andaluza de Noviolencia a lanzar una idea que en 1984, ya con el apoyo de la también Asamblea de Noviolencia de Cantabria, de Justi-

cia y Paz de Barcelona y del Movimiento de Objeción de Conciencia, se convirtió en la primera campaña estatal de objeción fiscal a los impuestos militares. Técnicamente, la objeción fiscal consiste en descontar del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el porcentaje que corresponde al Ministerio de Defensa de acuerdo con los Presupuestos del Estado. Este dinero, que, diga lo que diga la ley de presupuestos, no se iba a destinar a la defensa de la sociedad, sino a la preparación de las guerras en defensa de unos pocos, se desvía hacia fines socialmente útiles.



Como se ve, no se trata de pagar menos impuestos; se paga exactamente lo mismo, pero haciendo uso del irrenunciable derecho a la objeción de conciencia; el objetor u objetora fiscal se niega a colaborar con el mantenimiento del aparato militar y opta por entregar directamente esa parte de su impuesto a algo que verdaderamente le defiende. No se trata tampoco de arreglar un problema exclusivamente personal, sino que se trata también

de una implicación en la lucha por un mundo en el que la paz no sea la victoria del más armado, sino el resultado de la justicia. La objeción fiscal se constituye así en una lucha que, además de su carácter de resistencia a lo militar, tiene un fuerte componente de solidaridad: desde el primer momento quedó bien claro que la Objeción de Conciencia Fiscal iba a trabajar también para impulsar otras tareas que, llevadas a cabo por toda una serie de movimientos y grupos, estructuraban en su conjunto lo que se podría llamar una *defensa alternativa* que progresara en el desarrollo y la justicia social. Este aspecto quedó más claro cuando se lanzaron los llamados *proyectos colectivos*. Es el objetor u objetora fiscal quien decide a dónde enviar el dinero de su objeción fiscal, pero en 1985 se pensó que reuniendo ese dinero se podrían conseguir unas cantidades que permitieran la puesta en marcha de proyectos que de otra forma no podrían acometerse o concluirse adecuadamente. Y así, en 1986 se propusieron el apoyo a una cooperativa agrícola de jornaleros en Marinaleda (Sevilla) y a una escuela en Batahola (Nicaragua). De los algo más de cinco millones de pesetas, directamente desviados por los objetores y objetoras en aquel año, tres millones trescientas mil pesetas fueron para estos proyectos que, repartidos, permitieron en un caso la construcción de un invernadero y en el otro, junto con una ayuda de Manos Unidas, la escolarización de unos mil niños y niñas en unas escuelas que, pese a estar ya construidas, no se podían poner en marcha por falta de material básico. En 1987, los proyectos colectivos fueron la Casa por la Paz en Quintanilla del Somoza (León), junto al campo de tiro de El Teleno, y las Brigadas Internacionales por la Paz en Centroamérica. En 1988, la Campaña de Defensa de la Menor, de la Coordinadora de Barrios; una escuela en un campo de refugiados saharauis, y la Campaña de Solidaridad con Nicaragua. Y en 1989, la Casa por la Paz de Anchuras y una escuela de capacitación profesional en Eritrea. Este año, de nuevo una cooperativa agrícola en Cádiz y un programa de suministro de agua potable y educación sanitaria en Lesotho serán los receptores del dinero de la Objeción Fiscal.

Todos estos proyectos y otras muchas organizaciones y colectivos han recibido en total más de 22 millones de pesetas; y deberían recibir otros casi 34 millones desde Hacienda, pues éste es el dinero que, de acuerdo con los datos recibidos en los centros coordinadores, se ha objetado en los casos en que la declaración de la renta sale «a devolver», que también en estos

OBJETORAS/ES POR EDADES (AÑO 1.989)

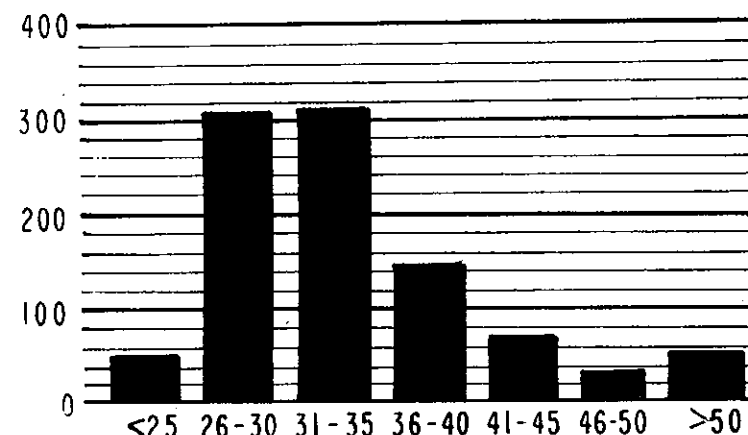


GRAFICO 3

casos se puede hacer objeción fiscal. En el gráfico 1 se ven las cantidades directamente desviadas y las reclamadas a Hacienda, y en el gráfico 2 se ve la evolución del número de objetores según los datos recibidos en los grupos de objeción fiscal. Es importante señalar que se trata de datos mínimos, pues son muchos aquellos que hacen objeción fiscal y luego no se lo comunican al centro coordinador correspondiente. En 1987 pudimos comprobar que, de 423 ingresos que se habían producido en la cuenta donde se reúne el dinero para los proyectos colectivos, sólo 180 se correspondían con datos que tuvieran los centros coordinadores; y en 1988 sólo 145, de 294, lo que permite pensar que el número de objetores y objetoras puede ser el doble de lo contabilizado, pero para hacer estos gráficos sólo utilizamos los datos efectivamente recibidos. La evolución anual de la objeción fiscal no depende sólo del número de objetores y objetoras que haya, sino también de los resultados de sus respectivas declaraciones. De ahí viene que el aumento sostenido del número

de objetoras y objetores fiscales no se vea correspondido con un aumento paralelo de las cantidades objetadas. Y si está claro que influir en la segunda variable es algo que escapa a las posibilidades de los grupos de objeción fiscal, también en la primera hay un factor externo muy importante y que se nota, especialmente, al analizar la edad de los objetores y objetoras fiscales. En el gráfico 3 tenemos el número de objetores y objetoras del año 1989 agrupados por intervalos de edad. De los 309 que hay en el segmento «26 a 30 años» sólo 71 corresponden a menores de veintiocho años. No es que los más jóvenes no se sientan partícipes de esta lucha, es que, sencillamente, muchos están en el paro.

Los gastos militares

Cuando en objeción fiscal se habla de números, parece inevitable hablar del gasto militar español. Decimos inevitable porque, para los objetores y objetoras fiscales, el problema no es que se gaste mucho en el campo militar, sino simplemente que se gasta, y por ello creemos que el debate no se debe centrar tanto en las cifras como en las ideas. El porcentaje que los objetores y objetoras de conciencia fiscales aplican para calcular el importe de la objeción fiscal es el del Ministerio de Defensa en los Presupuestos del Estado. Desde 1983 ese porcentaje ha sido, sucesivamente, 10,6, 10,24, 10,12, 8,81, 8,7, 8,5 y, para el año 1989, 7,7. Lo hacemos así por razones de simplificación a la hora de explicar la objeción fiscal, pero, como advertimos en nuestros folletos, el Ministerio de Defensa no es más que una parte, aproximadamente los dos tercios, del gasto militar global del Estado español, de acuerdo con los parámetros internacionalmente admitidos. En el cuadro 1 están los datos referidos a estos años, así como el incremento que se ha dado de un año para otro, junto con el incremento del IPC referido al año correspondiente.

Como se ve, el gasto militar crece año tras año, pero al hablar de porcentajes parece otra cosa porque otras partidas del presupuesto, especialmente la Deuda Pública, han aumentado más. Hay que decir, por otra parte, que ni siquiera en la columna «gasto militar global» aparece todo el gasto militar. Así, en una memoria remitida el pasado febrero a las Cortes por el Ministerio de Defensa se reconocía haber utilizado créditos internacionales para la compra de material bélico al margen de los recursos

Cuadro 1

Año	Ministerio de Defensa	Incremento año anterior	Gasto milit. global	Incremento año anterior	IPC
1983.....	478		743		12,2
1984.....	553	15,7	846	5,7	9,0
1985.....	619	11,9	947	7,7	8,1
1986.....	631	1,9	966	1,0	8,3
1987.....	704	11,6	1.077	4,2	4,6
1988.....	762	8,2	1.158	15,0	5,8
1989.....	818	7,3	1.231	6,3	6,9
1990.....	870	6,4	1.326	7,8	5,7 *

(En miles de millones. Fuente: anuarios de *El País* y Vicenç Fisas en anuarios del CIP. * El IPC de 1990 es el previsto.)

asignados por el Parlamento² y, por otra parte, el propio Parlamento ha aumentado, en 1986 y 1987, el presupuesto de Defensa mediante créditos extraordinarios que suponían un 18,5 y un 17,5 por 100 adicional a lo inicialmente presupuestado. Al margen de la costumbre de conceder créditos «extraordinarios» de semejante calibre, el aumento constante en varios puntos por encima de la inflación viene garantizado por la Ley de Dotaciones Presupuestarias para Sosténimiento de las Fuerzas Armadas aprobada en 1982 y prorrogada por segunda vez el 26 de abril de 1990. La columna del IPC que hemos incluido en el cuadro demuestra que esto se está cumpliendo. De acuerdo con esa ley, entre 1990 y 1998 se van a gastar en nuevo material y mantenimiento cuatro billones y medio de pesetas. A modo de comparación, digamos que el Proyecto de Reforma del Sistema Educativo habla de un presupuesto de un billón trescientas mil pesetas. De todos modos, no se trata solamente de una cuestión cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, puesto que los presupuestos militares no debieran existir.

La objeción de conciencia laboral

Al derroche económico que supone el gasto militar, hay que añadir el problema ético de que para amortizar las inversiones necesarias para el desarrollo de nuevo armamento hay que entrar de lleno en el mercado internacional de armas y, así, pueden encontrarse armas españolas en Marruecos, Chile, Irán, Irak, Libia, Egipto, Sudáfrica, Indonesia y otros países cuyos gobier-

² *El País*, 27 de febrero de 1990.

nos son de aquellos que, a buen seguro, nuestros gobernantes no quisieran tener que sufrir nunca, pero que con las armas que les venden, se mantienen en el poder. Sin embargo, ya dijo el ministro Serra, antes de cumplir un año en el cargo, que la industria militar iba a ser el motor de la reconversión industrial de España.

Estas intenciones, estas realidades, han dado pie a que se plantee un nuevo tipo de objeción de conciencia: la objeción de conciencia laboral. ¿Tienen los dirigentes de una empresa el derecho a que el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la misma se dirija hacia la producción de material militar, de armas que, como dijo Manuel Vicent, «la muerte es su única vocación, el resto es sólo hipocresía»? Evidentemente, no; tampoco en esto se puede restringir el derecho a la objeción de conciencia a un simple no tener que ir a la *mili*. Son todavía muy pocos los casos que se conocen, pero a mediados de los años 80 un trabajador de ENASA vio cómo la cadena de montaje en la que estaba pasando a producir vehículos militares. Exigió entonces el derecho a no colaborar en la producción militar y consiguió que le destinaran a una cadena de producción civil. Casos del mismo tipo se han dado también en Construcciones Aeronáuticas, S. A. (CASA). Recientemente, profesores de la Universidad Politécnica de Barcelona se han negado a participar en proyectos de investigación con claras connotaciones militares. Son simples muestras de un nuevo horizonte en la lucha por un mundo sin guerras.

Los defensores de la industria militar no suelen entrar en ese tipo de problemas éticos³. Dicen que conviene impulsarla porque desarrolla tecnología aplicable a otros sectores, genera empleo y aporta divisas. Estos tres argumentos son rechazables: se ha demostrado que las patentes militares que tienen utilidad en lo civil representan menos del 30 por 100, y que al ser una

³ Buen ejemplo de este parecer se halla en las palabras del Consejero de Industria del Gobierno de Navarra, del PSOE, en su respuesta a la oposición que suscitó la instalación de una fábrica de cañones con apoyo del Gobierno Foral: «nos hemos puesto por encima del tipo de producto y hemos tratado de ver los intereses de Navarra por encima de todo lo demás. La guerra no la hacen las armas, la hacen las personas. Además, lo que no se haga aquí se hace en otro sitio de España o de Europa y yo creo que los intereses de Navarra deben primar». (*Navarra hoy*, 21 de enero de 1987). La presión de navarros y navarras discrepantes con su opinión impidió su instalación.

industria muy tecnológica exige mucho capital, pero poca mano de obra, por lo que, con cada puesto de trabajo que se crea, se pierde la oportunidad de crear varios en otro tipo de empresas más *baratas*. Por último, está claro que en las ventas al exterior se trata con unos países fuertemente endeudados que no pagan y así, los dos contratos mayores, los que se hicieron con Egipto y Marruecos, han exigido intensas negociaciones diplomáticas para poder cobrarlos. Al final, para que paguen algunas partes ha habido que darles créditos a cuenta de los llamados Fondos de Ayuda al Desarrollo, es decir, créditos *blandos*. Según una respuesta del Gobierno a un senador, España ha financiado exportación de armamento en los últimos diez años por al menos 37.139 millones de pesetas de los Fondos de Ayuda al Desarrollo⁴. Y todavía está por demostrar la relación entre desarrollo y una lancha patrullera o un camión militar. Lo que está fuera de toda duda es que lo que verdaderamente justifica la industria militar es el deseo de poseer armas para conseguir poder.

El problema legal

La propuesta de la objeción fiscal es clara: basta de gastar el dinero en preparar la guerra, dediquémoslo a mejorar la sociedad. Es clara y es lógica. La experiencia de quienes llevamos años explicándola en debates públicos es que rara vez se encuentra a alguien que defienda la necesidad de los ejércitos. Lo que sí se nos suele decir es que es muy interesante lo que hacemos y que ojalá se pudiera llevar a cabo⁵, pero que sería un verdadero lío introducir semejante tema en nuestro sistema tributario. Lío o no lío, eso ya se está haciendo desde que se ha reconocido a todos los contribuyentes el derecho a decidir sobre el destino de una parte de su impuesto, concretamente entre la Iglesia Católica y fines de interés social, así que técnicamente es posible. Es innegable que podría darse alguna complicación, pero la Administración no puede exigirnos que para ahorrarle problemas renunciemos a nuestros derechos, a la libertad ideológica y de conciencia.

⁴ *El País*, 23 de abril de 1990.

⁵ El Tribunal Superior de Justicia de Navarra rechazó un recurso contra el Ministerio de Hacienda de los objetores fiscales y les condenó a costas. «Por muy encomiables que sean los fines del recurrente», como decía en la sentencia, optó por el llamado *imperio de la ley*.

Los objetores y objetoras de conciencia fiscales son conscientes de que el Estado no les va a aceptar, no va a reconocer su derecho hasta que no le quede otra solución, y por ello mismo no se han preocupado demasiado todavía de lo que podría ser una Ley de Objeción de Conciencia Fiscal. No obstante, y como aportación a un debate que debería abrirse cuanto antes, se puede dar el siguiente criterio: el Estado debe respetar el derecho a la objeción de conciencia fiscal en los temas relacionados con los derechos fundamentales de las personas, mientras que el objetor u objetora debe destinar la cantidad objetada a fines socialmente útiles. Probablemente sería necesario añadir algo referido a que la objeción no debe surgir, sencillamente, de que se prefiera recurrir al sector privado en el tema objetado. Así, se integran el derecho a la objeción fiscal y el sistema tributario en un marco coherente con la Constitución, que no habla de los impuestos hasta el artículo 31, es decir, hasta después de la sección «de los derechos fundamentales y las libertades públicas» que es donde se garantiza la libertad ideológica. Con esta sugerencia se pretende demostrar que la objeción de conciencia fiscal es asumible desde posturas legales y que si no se hace es porque quienes gobiernan y legislan no lo quieren. Lo que debe quedar claro desde el primer momento es que cualquier intento de regular el derecho a la objeción fiscal a los gastos militares debe llevar implícito el aceptar una reducción efectiva del gasto militar en función de las cantidades objetadas⁶.

Un derecho aplicable desde ahora

Quienes practican la objeción fiscal saben que este derecho, como tantos otros, va a haber que arrebatárselo al Estado con una lucha constante. Y la mejor manera de exigir un derecho es poniéndolo en práctica desde el primer momento, y más, como en este caso, cuando la gravedad del tema no permite esperar. Incluso el Tribunal Constitucional ha avalado esta actitud:

«No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado tal

⁶ Obsérvese que se dice «en función de» y no «por». El Impuesto sobre la Renta no supone más que una parte de los impuestos que cada ciudadano y ciudadana pagan, lo cual, obviamente, también habría de tenerse en cuenta.

regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales»⁷.

Hacienda se niega a reconocer esto y, así, los objetores y objetoras fiscales se están viendo abocados a sanciones, recursos y embargos, pero tal como se advierte en el folleto de su campaña: «Esto no nos debe asustar: estamos desarrollando una lucha que sabemos justa independientemente de lo que digan las leyes (...) Las leyes las hacen ellos, las aplican ellos y ellos tienen capacidad para saltárselas (...) Ellos tienen las leyes, ésa es su fuerza; la nuestra está en los y las que somos, en lo que somos.»

La objeción fiscal quiere contribuir a una mejor distribución de la riqueza, objetivo sólo alcanzable a partir de la desmilitarización de las sociedades y la búsqueda de nuevos parámetros de solidaridad entre las mismas. Las desigualdades se producen en todos los órdenes y para suprimirlas la no colaboración se convierte en imprescindible, de ahí la no financiación de la preparación de la guerra.

⁷ Sentencia del 11 de abril de 1985, BOE de 18 de mayo de 1985. Por sorprendente que pueda parecer, éste era el criterio del Tribunal Constitucional al dictar sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Más tarde, en su sentencia sobre la Ley de Objeción cambió de criterio.